



Asamblea General

Distr. general
27 de julio de 2023
Español
Original: inglés

Consejo de Derechos Humanos

54º período de sesiones

11 de septiembre a 6 de octubre de 2023

Temas 2 y 3 de la agenda

**Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos e informes de la Oficina
del Alto Comisionado y del Secretario General**

**Promoción y protección de todos los derechos humanos,
civiles, políticos, económicos, sociales y culturales,
incluido el derecho al desarrollo**

Resumen del taller entre períodos de sesiones sobre la puesta en práctica del derecho a participar en la vida pública en el contexto de la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) y de la recuperación tras la pandemia

Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos*

Resumen

Este informe se presenta en cumplimiento de la resolución 48/2 del Consejo de Derechos Humanos, de 7 de octubre de 2021, en la que el Consejo solicitó a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que organizara, antes del 54º período de sesiones del Consejo, un taller entre períodos de sesiones, de un día de duración, para examinar los problemas, las buenas prácticas y las experiencias en la puesta en práctica del derecho a participar en la vida pública, en particular en el contexto de la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) y de la recuperación tras la pandemia, así como la contribución de la participación a la salud pública. En el informe se ofrece un resumen del taller entre períodos de sesiones celebrado en formato híbrido el 31 de mayo de 2023 en Ginebra, y se incluyen las recomendaciones que en él se formularon.

* Se acordó publicar este documento tras la fecha prevista debido a circunstancias que escapan al control de quien lo presenta.



I. Introducción

1. De conformidad con la resolución 48/2 del Consejo de Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) organizó un taller entre períodos de sesiones, de un día de duración, sobre la puesta en práctica del derecho a participar en la vida pública en el contexto de la pandemia de COVID-19 y de la recuperación posterior.
2. El objetivo del taller era examinar en detalle los problemas, las experiencias y las buenas prácticas en relación con el ejercicio igualitario y efectivo del derecho a participar en la vida pública en el contexto de la pandemia de COVID-19 y de la recuperación posterior, y analizar cómo contribuye la participación a garantizar la salud pública.
3. A fin de que la participación de las partes interesadas fuese lo más amplia posible, el taller entre períodos de sesiones se celebró en formato híbrido, con interpretación en todos los idiomas de las Naciones Unidas, el 31 de mayo de 2023 en Ginebra, y se grabó y transmitió por Internet¹. Asistieron representantes de los Estados, de organismos especializados de las Naciones Unidas, de órganos regionales e intergubernamentales, de círculos académicos, de instituciones nacionales de derechos humanos y de organizaciones de la sociedad civil.
4. Tras la sesión de apertura de alto nivel, el taller entre períodos de sesiones consistió en tres sesiones temáticas sobre a) los problemas y buenas prácticas para garantizar el derecho a participar en la vida pública durante la pandemia de COVID-19; b) la contribución de la participación a la protección de la salud pública, entre otros en el contexto de la pandemia de COVID-19 y de la recuperación tras la pandemia: experiencias y buenas prácticas; y c) el camino a seguir: crear confianza a través de espacios participativos institucionalizados y un entorno propicio a fin de permitir una mejor respuesta a la pandemia y a futuras crisis sanitarias. Cada sesión contó con un moderador y con cinco panelistas con formación y puntos de vista diversos, que destacaron en sus intervenciones los aspectos clave del tema de la sesión correspondiente. La última parte de cada sesión se dedicó a los comentarios y preguntas de los demás participantes, a lo que siguió la exposición de unas breves observaciones finales de los panelistas y el moderador.
5. En el presente informe se ofrece un resumen de los debates mantenidos durante el taller, incluidas las recomendaciones pertinentes que se formularon en él.

II. Apertura del taller entre períodos de sesiones

6. La Alta Comisionada Adjunta para los Derechos Humanos declaró abierto el taller destacando el importante papel que desempeñaba la participación inclusiva, significativa y segura en el avance de los derechos humanos y la promoción de una democracia efectiva y resiliente, el estado de derecho, la inclusión social, el crecimiento económico y el desarrollo sostenible. Destacó además su decisiva contribución para garantizar la salud pública. Expresó preocupación por el hecho de que muchas personas siguieran enfrentándose a dificultades para ejercer su derecho a participar en la vida pública, que se vieron exacerbadas por la pandemia de COVID-19 y las medidas adoptadas posteriormente. A continuación, se centró en la erosión de la confianza observada durante la pandemia de COVID-19 y subrayó la importancia de restablecerla promoviendo la participación pública significativa como elemento central de la recuperación a largo plazo. En ese sentido, la inclusión y el empoderamiento de las voces de las personas más afectadas e infrarrepresentadas eran primordiales para elaborar respuestas más adecuadas y relevantes a las crisis. La Alta Comisionada Adjunta señaló las lecciones aprendidas y los ámbitos que requerían una mayor reflexión, como la vulnerabilidad de las instituciones a las crisis sanitarias inesperadas y generalizadas, la necesidad de salvaguardar las instituciones democráticas y adoptar marcos legislativos y procesos operativos adecuados, y el uso innovador de las tecnologías de la información y las comunicaciones para promover y estimular la participación ciudadana.

¹ Las grabaciones de vídeo y otros documentos del taller están disponibles en: <https://www.ohchr.org/es/events/events/2023/interessional-workshop-implementation-right-participate-public-affairs-context>.

Para concluir, subrayó que, ya fuese en el contexto de una emergencia de salud pública o de otra crisis mundial, la democracia debía adaptarse, pero nunca debilitarse. Las instituciones resilientes, la participación pública inclusiva, significativa y segura, el espacio cívico libre y el estado de derecho eran fundamentales para la recuperación sostenible tras cualquier crisis.

7. En su discurso de apertura, el Presidente del Consejo de Derechos Humanos y Representante Permanente de la República Checa, Václav Bálek, señaló que las personas seguían encontrando obstáculos en todo el mundo para disfrutar del derecho a participar en la vida política y pública y de los demás derechos humanos que lo hacían posible, concretamente los derechos a la igualdad y a la no discriminación, a la libertad de opinión y de expresión, incluido el derecho de acceso a la información, y a las libertades de reunión pacífica y de asociación. Las diferentes medidas adoptadas por los países en respuesta a la pandemia habían repercutido negativamente en todos los segmentos de la sociedad en todo el mundo. Además de las barreras preexistentes para la participación plena, igualitaria y significativa en la vida pública, algunas medidas desproporcionadamente restrictivas adoptadas durante la pandemia, junto con la falta de mecanismos de participación preestablecidos, inclusivos y significativos, habían dificultado aún más la participación, en particular de las mujeres, las personas con discapacidad, los Pueblos Indígenas, las personas que vivían en la pobreza, las minorías y otros grupos marginados. El Sr. Bálek subrayó que la pandemia había suscitado la necesidad de a) reflexionar sobre la vulnerabilidad de los sistemas sanitarios y de la infraestructura institucional; b) someter a examen la resiliencia de los procesos e instituciones democráticos; c) determinar formas de reforzar los sistemas y la gobernanza democrática en general; y d) proseguir los esfuerzos para garantizar la participación plena, igualitaria, significativa y amplia de las comunidades y los agentes de la sociedad civil en la toma de decisiones. El orador recordó una conclusión clave del cuarto período de sesiones del Foro sobre los Derechos Humanos, la Democracia y el Estado de Derecho, celebrado en noviembre de 2022, a saber, que el fortalecimiento de la democracia era clave para la recuperación sostenible tras las crisis y para aumentar la resiliencia frente a las emergencias actuales y futuras, como la pandemia de COVID-19 y el cambio climático².

8. En su declaración de apertura en vídeo, el Director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS) afirmó que la pandemia de COVID-19 había puesto de manifiesto las deficiencias de los sistemas sanitarios y los enormes costes de la desconfianza, y que las comunidades marginadas soportaban una carga desproporcionada de morbilidad. También había demostrado que la gobernanza participativa en materia de salud podía apoyar la equidad, la inclusión y la rendición de cuentas en relación con las políticas y la programación sanitarias. El Director General subrayó que debía darse prioridad a garantizar una participación social sistemática y significativa en la elaboración y aplicación de políticas sanitarias que respondieran a las necesidades de la población y promovieran la igualdad de género. Ello requería reformas legales; inversiones financieras estables; y el fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos para diseñar e implementar mecanismos de gestión de los desequilibrios de poder. El orador citó como ejemplos de buenas prácticas los espacios participativos establecidos por el Brasil, Tailandia y Túnez. Tras señalar que la Asamblea Mundial de la Salud de 2024 podría considerar una resolución relativa a la institucionalización de la participación social como medio para promover el derecho a la salud, destacó la importancia de empoderar a las personas y a las comunidades mediante la participación en la construcción de una atención primaria de la salud más sólida, resistente y centrada en las personas, así como de un futuro más sano, seguro y equitativo para todos.

9. En su discurso de apertura, la Representante Permanente Adjunta de Botswana, Mpho Michelle Mogobe, afirmó que las medidas adoptadas para contener la propagación de la COVID-19 habían puesto en peligro el derecho a participar en la vida pública. Hizo hincapié en la importancia de que los ciudadanos volvieran a participar plenamente en los asuntos públicos para reconfigurar y reestructurar el mundo tal y como exigían las realidades pospandémicas. Las restricciones a la participación tuvieron consecuencias de gran alcance para la democracia y el disfrute de los derechos humanos, especialmente entre los grupos vulnerables. La Sra. Mogobe destacó el impacto negativo que la exclusión de la población de la toma de decisiones había tenido en la mayor vulnerabilidad a la pobreza; en el disfrute de

² Véase [A/HRC/52/72](#), párr. 85.

los derechos humanos básicos, incluidos los derechos a la alimentación, el agua y la salud, y otros derechos económicos, sociales y culturales; y en el fracaso de iniciativas y políticas debido a la falta de implicación de los beneficiarios a quienes estaban destinadas. Como ejemplo de espacio participativo, la oradora citó un foro consultivo de Botswana denominado *kgotla*, equivalente tradicional de un parlamento moderno que servía de foro para consultar a todos los ciudadanos sobre asuntos de interés nacional y que actuaba como órgano consultivo del Parlamento. Tras destacar los modestos logros de Botswana, afirmó que aún quedaba mucho por hacer para ampliar el espacio de participación igualitaria de las mujeres en todas las esferas de la sociedad, especialmente en el liderazgo político. Para concluir, subrayó que también se debería dar prioridad a la participación de los jóvenes en el periodo posterior a la pandemia, incluyéndolos en la toma de decisiones como agentes del cambio, poseedores de conocimiento y asociados para el desarrollo de soluciones sostenibles para las generaciones presentes y futuras.

III. Dificultades y buenas prácticas para garantizar el derecho a participar en la vida pública durante la pandemia de COVID-19

10. La primera sesión, que se centró en describir el impacto de la pandemia de COVID-19 y las respuestas relacionadas con ella, así como en las dificultades que planteaba la aplicación del derecho a participar en la vida pública, fue moderada por la Oficial Encargada de la Subdivisión de Estado de Derecho, Igualdad y No Discriminación del ACNUDH.

11. Vasilka Sancin, profesora de Derecho Internacional de la Universidad de Liubliana, miembro del Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos y antiguo miembro y Vicepresidenta del Comité de Derechos Humanos, comenzó su intervención afirmando que el derecho a participar en la vida pública solo podía ejercerse de forma efectiva en un entorno en el que todas las personas disfrutaran plenamente de todos los derechos, en particular de los derechos a la igualdad y a la no discriminación, a la libertad de opinión y de expresión, incluido el derecho de acceso a la información, y a las libertades de reunión pacífica y de asociación. Señaló que todas las medidas adoptadas para proteger a la población en el contexto de un estado de emergencia, como una pandemia, debían ser temporales, proporcionadas, estrictamente necesarias y estar sujetas a revisión judicial, y no debían ser utilizadas para restringir de forma indebida los derechos humanos. Los problemas más destacados que coartaron las vías tradicionales de participación pública durante la pandemia fueron las estrictas medidas adoptadas para contener la propagación del virus y la aceleración de los procesos de toma de decisiones motivada por la urgencia de responder a la pandemia de COVID-19, así como la información errónea y la desinformación. La oradora indicó que la pandemia había exacerbado las desigualdades preexistentes en el acceso a la tecnología y la infraestructura digital debido a la falta de conectividad adecuada a Internet y de alfabetización digital. Algunos ejemplos de espacios participativos innovadores utilizados durante la pandemia para permitir una participación pública más amplia e inclusiva fueron las herramientas digitales para facilitar las reuniones virtuales interactivas de consulta, la recepción de comentarios de los ciudadanos y las iniciativas de datos abiertos. La Sra. Sancin subrayó la importancia de reducir la brecha digital mediante iniciativas que proporcionaran recursos y apoyo a los grupos marginados, como por ejemplo empoderamiento a través de programas de alfabetización digital. Por último, hizo hincapié en la contribución de las colaboraciones entre múltiples partes interesadas al mantenimiento y el aumento de la participación pública, incluso en tiempos de crisis, y destacó que las buenas prácticas identificadas no eran medidas temporales, sino que se convertirían en la nueva norma, incluso después de la pandemia.

12. La Secretaria General de CIVICUS, Lysa John, dijo que varios países habían utilizado la pandemia como excusa para recortar derechos fundamentales. A menudo, los Estados habían impuesto medidas de emergencia de forma precipitada, con escasa preparación y, en la mayoría de los casos, sin consultar a la sociedad civil. La aplicación de las medidas de confinamiento había afectado desproporcionadamente a las personas y los grupos marginados. Se habían multiplicado las leyes que restringían los derechos fundamentales, especialmente las libertades de expresión, asociación y reunión, con el pretexto de luchar

contra la desinformación y proteger la seguridad nacional, lo que repercutió en la capacidad de la sociedad civil para participar en la vida pública de manera efectiva y libre. La Sra. John subrayó que una crisis sanitaria no debería servir de pretexto para suprimir derechos humanos fundamentales. La sociedad civil debe ser considerada como asociada de los gobiernos a la hora de responder a las crisis sanitarias, garantizando para ello su participación en la formulación y aplicación de estrategias sanitarias eficaces. Sin embargo, las organizaciones de la sociedad civil apenas habían sido consultadas durante esos procesos. La Sra. John indicó que una de las principales lecciones aprendidas era que una sociedad civil capacitada constituía una parte esencial del tejido social y una fuente de resiliencia en tiempos de crisis, por lo que debía ser fomentada en lugar de reprimida. También mencionó algunos ejemplos de medidas a las que habían recurrido las personas para hacerse oír pese a las restricciones. Por ejemplo, las mujeres y las organizaciones de mujeres lideraron la lucha contra la violencia de género. La capacidad de la sociedad civil para participar en los procesos de recuperación y de respuesta y a la pandemia también dependía de su capacidad para sufragar y reducir sus gastos de funcionamiento. A ese respecto, la oradora describió algunas buenas prácticas que algunos gobiernos habían reforzado para abordar esos retos, mediante exenciones o reducciones en los contratos de alquiler, subsidios salariales, programas de acceso al crédito y planes de recuperación financiera, así como canales de colaboración flexibles e innovadores con organizaciones de la sociedad civil. Por último, destacó que se había percibido de forma abrumadora, sobre todo en el ámbito público, que la sociedad civil formaba parte plenamente integrante de la respuesta a una pandemia. Por lo tanto, era de la mayor importancia que los gobiernos reconocieran y apoyaran la idea de una sociedad civil plenamente empoderada, totalmente interconectada y dotada de recursos, que trabajara como asociado en pie de igualdad a fin de promover el desarrollo sostenible y los derechos humanos.

13. Nicole Ameline, miembro y ex Presidenta del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, dijo que la pandemia había demostrado que los derechos de la mujer no estaban suficientemente consolidados para resistir a las crisis. Era necesario un cambio de paradigma más radical para reconocer el pleno disfrute de los derechos de la mujer como política estratégica, no solo como obligación jurídica. Aunque las mujeres seguían siendo las víctimas principales de la discriminación, la violencia y los conflictos, también eran el motor del cambio y de la transformación sostenible y pacífica de la sociedad. Esto solo podía lograrse si las mujeres estaban empoderadas y asumían responsabilidades en todos los ámbitos. El fortalecimiento de los derechos de las mujeres no era solo una cuestión de reequilibrar la situación en respuesta a los efectos de la crisis, sino también un medio para prevenir otras crisis. También era un factor decisivo para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, un crecimiento justo y sostenible y una gobernanza moderna y transparente. La Sra. Ameline destacó la importancia de la plena aplicación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer con miras a reforzar los derechos de la mujer, incluido el derecho a participar en la vida pública. Resumió el enfoque principal del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en relación con la participación de las mujeres durante la pandemia y la labor que estaba realizando de redacción de una nueva recomendación general que tenía por objeto garantizar la representación igualitaria e inclusiva de las mujeres en los sistemas de toma de decisiones³. La exclusión de las mujeres de la toma de decisiones constituía una de las violaciones más graves de los derechos de la mujer. La Sra. Ameline concluyó su intervención subrayando que la igualdad de género debía entenderse como una solución, y no simplemente como una obligación o una limitación.

14. Martin Lundstedt, investigador del V-Dem Institute de la Universidad de Gotemburgo, presentó las conclusiones principales de un proyecto de investigación del Instituto titulado “The pandemic backsliding project”. El proyecto había hecho una evaluación para determinar si las restricciones adoptadas en 144 países durante la pandemia de COVID-19, es decir, de marzo de 2020 a junio de 2021, habían sido desproporcionadas, innecesarias o discriminatorias en siete esferas clave: medidas discriminatorias, violaciones de derechos inderogables, aplicación abusiva, inexistencia de plazos de aplicación de las

³ Véase <https://www.ohchr.org/es/events/events/2023/half-day-general-discussion-equal-and-inclusive-representation-women-decision>.

medidas de emergencia, restricciones al poder legislativo, campañas oficiales de desinformación y restricciones a los medios de comunicación. Se constató que solo 13 gobiernos no habían incurrido en ninguna infracción durante los primeros 15 meses de la pandemia, mientras que más de dos tercios de los países habían cometido en algún momento vulneraciones moderadas o graves de las normas democráticas. Sin embargo, en junio de 2021, la mayoría (57 %) ya no cometía ninguna infracción o solo infracciones leves, lo que significaba que las medidas excesivas no habían persistido en esos países. El orador señaló que, aunque en algunos países las elecciones se pudieran haber aplazado ilegalmente o desarrollado de manera deficiente debido a la pandemia, la mayoría de los países había celebrado elecciones desde entonces y, en general, su calidad no había disminuido durante esos años. Remitiendo a otro estudio basado en datos del mismo proyecto, destacó que no existía relación alguna entre la gravedad de las vulneraciones y las muertes por COVID-19 notificadas, refutando así la idea de que la adopción de tales medidas había sido impuesta por la situación. Concluyó señalando que una respuesta eficaz a la pandemia no podía comprometer el respeto y la defensa de las normas democráticas.

15. Milene Molina Arancibia, activista lesbiana y Presidenta de Luanda, una organización de la sociedad civil de mujeres afrodescendientes, compartió su experiencia respecto de la participación de las mujeres afrodescendientes en la toma de decisiones en los plano local y nacional en Chile. Presentó el trabajo que había realizado cuando estaba empleada como funcionaria en el municipio de Arica creando registros administrativos precisos en los que se incluía la variable de autoidentificación para las personas afrodescendientes a nivel local en Arica. Explicó que, sobre la base de esos registros y tras intercambios con diversos agentes políticos de Arica, el municipio pudo crear registros administrativos en los centros de salud familiar, lo que posteriormente les permitió facilitar alimentos, kits sanitarios, vales y servicios de atención en salud mental y ayudó a garantizar el acceso a la asistencia sanitaria mediante un enfoque interseccional adaptado a las necesidades específicas de los afrodescendientes de la zona. Sin embargo, dijo que el espacio público para esas personas se había reducido a nivel nacional. Muchas personas afrodescendientes habían perdido su trabajo y se habían visto obligadas a recurrir a la venta ambulante, lo que había dado lugar a medidas discriminatorias durante la pandemia, incluido el perfilado racial, ya que se les culpaba del aumento de los casos de COVID-19. La Sra. Arancibia señaló que quedaba mucho por hacer para que los afrodescendientes participaran en el espacio de la toma de decisiones. Subrayó la necesidad de cambiar la percepción de que las personas afrodescendientes tomaban decisiones únicamente relacionadas con sus esferas de interés, y no sobre otras cuestiones, ya que esa percepción era una de las dificultades que habían obstaculizado la participación de los afrodescendientes en otros espacios de toma de decisiones.

16. En el debate que tuvo lugar a continuación, los participantes acogieron favorablemente el enfoque que se había dado a la reunión. Señalaron el agravamiento de las desigualdades preexistentes durante la pandemia de COVID-19, que había afectado principalmente a los grupos marginados y vulnerables, incluido su derecho a participar en la vida pública y el cierre del espacio cívico. Subrayaron la importancia de no utilizar la pandemia de COVID-19 como pretexto para restringir el espacio democrático y cívico, ignorar el estado de derecho y las obligaciones internacionales y violar los derechos humanos, incluido el derecho a participar en la vida pública. Destacaron que las directrices para los Estados sobre la puesta en práctica efectiva del derecho a participar en la vida pública eran más pertinentes que nunca⁴. Se exhortó a garantizar procesos inclusivos y participativos que abordaran las necesidades y mitigaran los riesgos de quienes habían sido marginados durante la pandemia, especialmente las mujeres y las niñas. Se hizo hincapié en la importancia de que los procesos de adopción de decisiones que afectaban a la vida de las personas se basaran en el derecho internacional de los derechos humanos y de garantizar la transparencia, el acceso a la información y la participación en los planos local, nacional e internacional.

17. En sus observaciones finales, los panelistas reiteraron la importancia de actuar de forma preventiva antes, durante y después de una crisis y de aplicar realmente el principio *in*

⁴ Véase https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/PublicAffairs/GuidelinesRightParticipatePublicAffairs_web_SP.pdf.

dubio pro reo respecto del derecho a participar en la vida pública en caso de que se plantearan dudas en cuanto a la imposición de restricciones. Afirmaron que el diseño, el desarrollo y el funcionamiento de las nuevas tecnologías, incluida la inteligencia artificial, tanto en circunstancias normales como durante las crisis, debían ser plenamente coherentes con las normas de derechos humanos. Añadieron que debían reforzarse las sinergias en colaboración con los agentes de la sociedad civil y el sector privado a todos los niveles, ya que la eficacia de cualquier actuación gubernamental dependía esencialmente de la cooperación entre múltiples partes interesadas. Destacaron la necesidad de proteger a los activistas, periodistas, defensores de los derechos humanos, denunciantes de irregularidades y a otras personas que se manifestaban contra las prácticas gubernamentales, así como de garantizar un espacio libre y seguro para la sociedad civil y los medios de comunicación, dado su papel crucial en la recopilación y difusión de información, en la concienciación sobre los retos y las prácticas, tanto buenas como abusivas, y en la exigencia de responsabilidades a quienes vulnerasen el derecho a participar en la vida pública. También se puso de relieve la función fundamental que desempeña la libre circulación de la información para prevenir las violaciones de los derechos y permitir una respuesta eficaz a la pandemia, así como la importancia de abordar los problemas de la censura, la vigilancia y las violaciones del derecho a la privacidad en el uso de las nuevas tecnologías.

IV. Contribución de la participación a la protección de la salud pública, entre otros en el contexto de la pandemia de COVID-19 y de la recuperación tras la pandemia: experiencias y buenas prácticas

18. La coordinadora del derecho a la salud del ACNUDH moderó la segunda sesión, que se centró en las experiencias y buenas prácticas a nivel local, nacional y supranacional en la aplicación del derecho a la participación pública con miras a proteger la salud pública.

19. La coordinadora de incidencia pública y apoyo a las políticas públicas de la Fundación Huésped, Carmen Ryan, compartió su experiencia en la defensa de los derechos de los grupos marginados, incluidas las personas que viven con el VIH o corren mayor riesgo de contraerlo. Puso de relieve que no se podría haber avanzado en la respuesta al VIH sin la participación efectiva de grupos clave población, como las personas transgénero, los trabajadores y trabajadoras sexuales y las personas que viven con el VIH. La participación de la comunidad en la toma de decisiones en materia de salud, incluidas la elaboración, aplicación y evaluación de las políticas sanitarias, no solo era un derecho fundamental y un imperativo ético, sino también la mejor manera de promover programas útiles y eficaces en función de los costos. También resultaba esencial para superar las barreras que podrían impedir la implicación comunitaria, como ideas erróneas sobre el impacto de la participación o los problemas logísticos, como horarios de trabajo poco flexibles. La participación de los grupos marginados requería esfuerzos concretos para crear espacios de diálogo que tuvieran en cuenta sus necesidades y garantizaran una escucha efectiva. Escuchar a las personas requería el reconocimiento y el respeto de su existencia. Entre los mecanismos para llegar a las comunidades más pobres, a los migrantes y a otros habitantes de los barrios marginales de Buenos Aires durante la pandemia figuraban un mecanismo de intervención de emergencia y la comunicación con las comunidades a través de referentes. Durante una crisis, atender las necesidades urgentes de la población, como la alimentación, podía impulsar una colaboración significativa. La Sra. Ryan hizo hincapié en la importancia de que las voces de los líderes comunitarios llegasen a los responsables de la adopción de decisiones para que conociesen sus puntos de vista, definieran los desafíos y elaborasen respuestas comunes. A pesar de los múltiples avances realizados durante la pandemia de COVID-19, la participación no se había integrado en la política de salud pública, como demostraba el ejemplo reciente de la viruela símica (ortopoxvirosis simia). La oradora concluyó señalando que no se podía formular ninguna propuesta eficaz para la futura preparación frente a pandemias sin una participación social adecuada.

20. La jefa de la Unidad de Colaboración Global de la Comisión Nacional de Salud de Tailandia, Nanoot Mathurapote, presentó la Comisión Nacional de Salud, cuyo mandato era crear espacios seguros para que el Gobierno, la sociedad civil, el mundo académico y el sector

privado entablasen un diálogo con miras a elaborar recomendaciones de política sanitaria. La Comisión dirigía la organización de espacios seguros a distintos niveles, como la Asamblea Nacional de Salud, las asambleas provinciales de salud y las cartas de salud comunitaria, proporcionando espacio y un proceso participativo que reunía a todos los sectores para formular a los responsables de la adopción de decisiones recomendaciones para que se tradujesen en medidas. La oradora explicó que, en Tailandia, la participación social llevaba mucho tiempo institucionalizada y que un tercio de los miembros de la Comisión, presidida por el Primer Ministro, eran representantes de la sociedad civil. La Comisión funcionaba perfectamente en circunstancias normales, pero se volvía demasiado formal en tiempos de crisis. Por lo tanto, tras el surgimiento de la pandemia de COVID-19, la Comisión había creado un grupo de trabajo *ad hoc* multisectorial para trabajar con más rapidez y flexibilidad. La Sra. Mathurapote señaló que podría ser necesario adaptar los espacios y procesos participativos a la nueva situación, por ejemplo, acortando el proceso, estableciendo una estructura elástica y flexible en lugar de los órganos bien estructurados existentes e incluyendo el uso de plataformas digitales en lugar de las consultas presenciales. La participación de la comunidad en la preparación y respuesta ante emergencias sanitarias era esencial para identificar a las personas vulnerables de la comunidad y sus necesidades específicas, garantizar un flujo eficaz de información y crear confianza entre el Gobierno y la población. La provisión de información con base empírica a los responsables de formular políticas en tiempos de crisis ayudaba a encontrar soluciones adecuadas. No solo era importante la voluntad política, sino también la determinación del personal. Por último, la Sra. Mathurapote hizo hincapié en la necesidad de la participación social antes, durante y después de las crisis. Si no había inversión antes de que se produjera una crisis, no resultaría fácil crear participación social mientras la crisis se desarrollaba.

21. La responsable de derechos humanos del Departamento de Igualdad de Género, Derechos Humanos y Equidad en la Salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Rachel Mary Hammonds, señaló que la participación era un principio transversal de los derechos humanos que influía en la calidad y la eficacia de las políticas y los programas sanitarios y era esencial para abordar muchos de los problemas estructurales que impedían el acceso inclusivo y equitativo a la salud y sus determinantes subyacentes. Hizo hincapié en la necesidad de establecer prioridades, diseñar políticas y tomar decisiones de forma participativa para garantizar que las estrategias y los planes de acción nacionales del ámbito sanitario se basaran en las aportaciones de una amplia gama de ciudadanos, investigadores y pacientes. La falta de enfoques participativos en la toma de decisiones sobre salud pública en todo el mundo había contribuido a que las respuestas de emergencia afectaran de forma desproporcionada a las comunidades marginadas, que eran las que tenían menos capacidad para soportar esos riesgos debido a la presencia de factores estructurales que promovían la exclusión. La Sra. Hammonds indicó que muchos de los países que mejor habían respondido a la pandemia de COVID-19 eran los que habían implicado, educado y empoderado a las comunidades, incluidas las que a menudo eran objeto de exclusión y discriminación. Se requería un enfoque multisectorial para garantizar que la participación no fuera una mera formalidad. Algunos ejemplos de buenas prácticas presentados por la oradora fueron a) la iniciativa de participación de la sociedad civil de Macedonia del Norte, que había involucrado a las comunidades romaníes en el diseño y la ejecución de las políticas que podían afectarles; b) un proyecto en el condado de Kisumu, en la parte occidental de Kenya, en el que habían participado los jóvenes que desempeñaban un papel fundamental para garantizar el cumplimiento por parte de la comunidad de las intervenciones sociales y de salud pública; y c) el mecanismo de participación de Guatemala, que había implicado a personas con discapacidad en las emergencias sanitarias. La oradora también hizo referencia a los países que habían elaborado ejemplos creativos de espacios participativos para garantizar el acceso a los medicamentos durante una pandemia, como Malawi, la República Unida de Tanzania, Tailandia, Viet Nam y Zimbabwe. Para concluir, destacó que resultaría muy difícil aplicar enfoques inclusivos si no se tenía la confianza de las comunidades.

22. La jefa del Departamento de Legislación y Políticas Públicas de la Oficina del Defensor del Pueblo de la República de Moldova, Svetlana Rusu, presentó la experiencia de la Oficina a la hora de abordar las dimensiones de la pandemia relacionadas con los derechos humanos. Habían empezado a trabajar en línea y se había animado al público a ponerse en contacto con ellos por otros medios, como el correo postal, el correo electrónico o el teléfono

o cumplimentando un formulario en línea. Se había creado una página especial en el sitio web de la Oficina para facilitar información y recomendaciones al Gobierno y a la población. El Defensor del Pueblo había instado a las autoridades a establecer un mecanismo de cooperación con los miembros del Comité de Emergencia y, desde el comienzo de la pandemia, se había movilizado a todo el personal de la Oficina para que participara activamente y supervisara de cerca las actividades del Comité de Emergencia y de otras autoridades locales y centrales. El Defensor del Pueblo había recomendado específicamente al Ministerio de Sanidad que revisara las disposiciones del estatuto del Comité de Emergencia y adoptara medidas para proteger el derecho a la salud. Se había elaborado un informe temático sobre el acceso a los servicios básicos de salud durante la pandemia, en el que se había puesto de manifiesto la falta de medidas adecuadas para garantizar debidamente el derecho a la salud, incluida la insuficiente atención prestada al tratamiento de otras categorías de enfermedades durante la pandemia. Para abordar los aspectos preocupantes derivados de las deficiencias del sistema sanitario, el Defensor del Pueblo había formulado recomendaciones concretas, en las que pedía un aumento gradual del gasto público en asistencia sanitaria para mejorar su accesibilidad y calidad, remuneraciones adecuadas para el personal de la salud y la contratación y formación de más trabajadores de la salud. Las recomendaciones también incluían medidas concretas que debían adoptarse para facilitar el acceso a los servicios de salud a las personas que vivían en zonas rurales, las personas con discapacidad, las personas de edad y los miembros de la comunidad romaní, entre otros. La Sra. Rusu señaló que las recomendaciones habían tenido un impacto global positivo en la toma de decisiones, a pesar de la actitud cautelosa de las autoridades hacia las iniciativas y recomendaciones del Defensor del Pueblo. Concluyó subrayando la importancia de mantener la independencia de las instituciones nacionales de derechos humanos en el desempeño de sus actividades, incluso en tiempos de crisis.

23. Jenny Chicaiza, especialista en derechos de los Pueblos Indígenas, habló del impacto de la pandemia de COVID-19 en la participación de las comunidades indígenas del Ecuador. Señaló que la pandemia había afectado de forma desproporcionada a los Pueblos Indígenas debido a las desigualdades preexistentes y que persistían, como la pobreza y la falta de servicios básicos, medicinas y asistencia sanitaria. Al parecer, el impacto negativo de la pandemia de COVID-19 sobre los Pueblos Indígenas se había duplicado debido al aumento de las actividades extractivas durante la pandemia, como la minería, la exploración petrolera y la explotación forestal. Las organizaciones indígenas habían criticado duramente las políticas gubernamentales para responder a las necesidades de los Pueblos Indígenas durante la pandemia, puesto que se les había excluido de los procesos de toma de decisiones que afectaban a sus vidas. La acción colectiva de las comunidades con el apoyo de múltiples actores y sus pertinentes actividades culturales y lingüísticas, incluidos los conocimientos tradicionales sobre biodiversidad, alimentación, agricultura y salud, habían contribuido a salvar vidas en las llanuras, la selva, las zonas costeras y las ciudades, y las nuevas tecnologías y la capacitación de promotores de salud comunitaria habían desempeñado una importante función para superar algunos de los retos. La Sra. Chicaiza insistió en que solo se podían prevenir los conflictos y resolver las tensiones sociales con la participación significativa e integradora de los Pueblos Indígenas y el fomento de la confianza entre los gobiernos y sus comunidades. Señalando que el proceso de diálogo iniciado en 2022 entre el Gobierno del Ecuador y las organizaciones indígenas era una buena práctica, pese a la actual paralización de las negociaciones, expresó la confianza en que esta medida constituyera un punto de partida para comprender a los Pueblos Indígenas en el contexto de un Estado plurinacional. La Sra. Chicaiza instó a diversas partes interesadas, incluido el sistema de las Naciones Unidas, a intensificar sus esfuerzos para garantizar la participación significativa e inclusiva de los Pueblos Indígenas en la toma de decisiones sobre asuntos que afectaban a sus vidas.

24. En el debate que tuvo lugar a continuación los participantes reiteraron la importancia de recopilar datos comunitarios, tanto cuantitativos como cualitativos, para orientar las reformas de política y preparar respuestas adecuadas a las crisis, así como de aumentar la colaboración a fin de superar las limitaciones. Una participante de la OMS recordó a las delegaciones que tenían la oportunidad de comentar un documento técnico de antecedentes de la OMS sobre la participación, en el que se habían determinado cuatro puntos clave para la participación: a) inversión de recursos financieros suficientes y previsibles; b) inversión

en creación de capacidad de los funcionarios públicos y la sociedad civil; c) establecimiento y fortalecimiento de mecanismos que favorezcan la participación sostenida y regular; y d) evaluación de la participación mediante el seguimiento y la utilización de los datos. Los participantes subrayaron que los Pueblos Indígenas no solo debían ser beneficiarios de las políticas sanitarias, sino también partes interesadas clave, de modo que sus aspiraciones pudieran reflejarse debidamente a través de sus prácticas tradicionales, recordando las recientes resoluciones de la OMS por las que se reconocía el valor de la medicina tradicional.

25. En sus intervenciones finales, los panelistas destacaron la importancia de la recogida de datos comunitarios y de su uso en tiempos de crisis para determinar las necesidades de las comunidades y los grupos vulnerables, y señalaron que esos datos se podían validar científicamente para captar la riqueza de las aportaciones de la comunidad. La actitud de los responsables de formular políticas respecto de los datos recabados por las comunidades era igualmente importante. Los panelistas también hicieron hincapié en que, aunque podía parecer que la participación consumía mucho tiempo y recursos económicos, sería la política más eficaz en función de los costos y en cuanto al tiempo y más equitativa si se llevara a cabo de forma continuada. Se reiteró el papel crucial de las instituciones nacionales de derechos humanos en la respuesta a las crisis y la protección de los derechos humanos, así como su estrecha cooperación con las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones públicas. Se planteó la importancia de crear confianza entre los Pueblos Indígenas y las autoridades públicas, incluido el poder judicial, como condición necesaria para garantizar su participación efectiva. Se recordó la importancia de evaluar los datos basándose en las ciencias del comportamiento para comprender mejor los cambios en las respuestas de los gobiernos, las personas y las comunidades a la pandemia de COVID-19 en diferentes contextos.

V. El camino a seguir: crear confianza a través de espacios participativos institucionalizados y un entorno propicio a fin de permitir una mejor respuesta a la pandemia y a futuras crisis sanitarias

26. La tercera sesión fue moderada por Tod Howland, Oficial Encargado de la División de Actividades Temáticas, Procedimientos Especiales y Derecho al Desarrollo del ACNUDH. La sesión se centró en las actuaciones futuras, y se analizaron los temas clave relacionados con las condiciones que favorecen un entorno propicio para conseguir una participación social más eficaz, significativa y amplia y crear confianza en los procesos participativos.

27. Maria Chiara Campisi, coordinadora del programa sobre derecho sanitario de la Organización Internacional de Derecho para el Desarrollo, habló de la importancia del estado de derecho para generar confianza en las instituciones y crear las condiciones necesarias para un entorno propicio que permitiera la participación efectiva en la vida pública, entre otras circunstancias durante las emergencias de salud pública y después de ellas. Propuso tres herramientas concretas para posibilitar una participación efectiva en el contexto de una respuesta a tales emergencias basada en el estado de derecho: marcos jurídicos basados en el estado de derecho incluidas medidas de emergencia basadas en el estado de derecho, sistemas judiciales eficaces y acceso a la justicia, y creación de capacidad y empoderamiento jurídico de la sociedad civil y las comunidades para participar en los procesos de toma de decisiones de carácter sanitario. El estado de derecho exigía que existieran mecanismos de control parlamentario y revisión judicial, incluso durante las emergencias, para asegurar la participación, la supervisión y la rendición de cuentas respecto de las medidas adoptadas. Por lo tanto, era preciso garantizar la continuidad de los servicios parlamentarios y judiciales en tiempos de emergencia mediante soluciones alternativas, incluido el uso de tecnologías digitales. La institucionalización de mecanismos con procesos establecidos que asegurasen la participación pública integradora, diversa y segura en la toma de decisiones relacionadas con la salud durante las emergencias debería ser un componente clave de la preparación de un país para las emergencias de salud pública. La pandemia del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) había puesto de manifiesto la importancia de empoderar a las comunidades para garantizar su participación efectiva y su implicación en los planes de prevención y

respuesta. La Sra. Campisi concluyó que, para conseguir la participación efectiva durante las emergencias de salud pública, se requería una inversión importante y el compromiso de defender el estado de derecho, los principios democráticos y los derechos humanos en circunstancias normales, y que todos los países deberían incluir instrumentos y mecanismos institucionalizados del estado de derecho en sus planes de preparación para tales emergencias a fin de estar mejor preparados para futuras pandemias.

28. Dheepa Rajan, experta en sistemas sanitarios del Observatorio Europeo sobre los Sistemas y las Políticas de Salud de la OMS, subrayó que institucionalizar la participación hacía que ganara regularidad y sostenibilidad, lo que resultaba beneficioso para los objetivos a largo plazo de los sistemas sanitarios y la creación de confianza, en contraposición con la toma de decisiones *ad hoc* y a puerta cerrada para objetivos a corto plazo, que no tenía en cuenta las voces de la sociedad, como se había podido ver durante la pandemia de COVID-19. La confianza no podía crearse de un día para otro ni solo durante una emergencia. La confianza, la resiliencia y la preparación para futuras crisis podían lograrse a través de espacios participativos bien diseñados e institucionalizados que vincularan las iniciativas de participación con la formulación de políticas, lo que se traduciría en decisiones que respondieran a las necesidades reales de las personas al tiempo que generaran confianza. La participación debía plantearse como un esfuerzo a largo plazo de creación de confianza y relaciones. La institucionalización podía garantizar una participación regular y sostenible únicamente si se fomentara la capacidad de los gobiernos, las organizaciones de la sociedad civil y las comunidades para gestionar adecuadamente dichos espacios participativos y participar eficazmente en ellos. También exigía la asignación de recursos, incluido un nivel de financiación estable, previsible y suficiente. La Sra. Rajan presentó a los participantes información actualizada sobre los esfuerzos llevados cabo por algunos países durante la reciente Asamblea Mundial de la Salud para que se adoptase una resolución en 2024 con objeto de garantizar la institucionalización de la participación en la formulación de políticas sanitarias. Tras señalar la escasez de datos sobre la calidad de la participación, la Sra. Rajan recalcó que era importante mejorar considerablemente el seguimiento y la utilización de los datos. Además de garantizar la participación, era necesario elaborar indicadores y métodos para medir su calidad a fin de continuar mejorando los espacios participativos institucionalizados, a pesar de las dificultades prácticas de la medición. Por último, la Sra. Rajan destacó la importancia de las reformas jurídicas para afianzar los espacios participativos en el marco legislativo.

29. Emmanuel Ganse, activista de los derechos cívicos y digitales, Presidente del Institut Tonafa y líder de la promoción de 2022 de los Jóvenes Líderes por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, presentó los principales retos que habían repercutido negativamente en la participación juvenil durante la pandemia. Entre ellos figuraban las medidas de emergencia innecesarias y arbitrarias, como las restricciones al ejercicio de las libertades de reunión, expresión y circulación; la creciente brecha entre ricos y pobres; el cierre de escuelas; y el acceso desigual a la educación debido a la brecha digital y a otras desigualdades. El orador recordó la importancia de disponer de un marco jurídico claro en caso de pandemia para reducir los riesgos sin restringir el espacio civil. La implicación de la juventud en el diseño de las medidas de prevención y respuesta, entre otras cosas mediante el acceso efectivo a la información, era crucial. Los jóvenes, incluidos los blogueros y las personas influyentes, podían actuar como intermediarios en sus sociedades para concienciar sobre la necesidad de una medida colectiva, por ejemplo, la vacunación universal en respuesta a una crisis como la pandemia de COVID-19. El orador afirmó que la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías podían facilitar y aportar soluciones en muchos aspectos de la vida humana, incluidas las crisis sanitarias. Por tanto, se debía fomentar el uso de esas soluciones innovadoras, velando por que estuvieran debidamente reguladas y fuesen compatibles con los derechos humanos y reduciendo la brecha digital.

30. La Directora Ejecutiva de [Health NGOs Network](#), Margaret Lubaale, comenzó resumiendo las medidas adoptadas por el Gobierno de Kenya para garantizar la participación pública durante la pandemia de COVID-19, incluido el intercambio de información, el uso de plataformas en línea y tecnologías digitales, las iniciativas de verificación de datos y las medidas de creación de capacidad para empoderar a las personas y a las comunidades. Subrayó la importancia de proteger a la sociedad civil y a los defensores de los derechos humanos en tiempos de crisis mediante mecanismos de denuncia, protección e investigación.

Puso de relieve el papel crucial de los mecanismos de supervisión independientes, incluido el poder judicial, el parlamento y las instituciones nacionales de derechos humanos en la supervisión y la información respecto de la aplicación de la legislación y en la prevención de los abusos de poder. La sensibilización también era esencial para contrarrestar los estereotipos negativos y promover la comprensión y una cultura de respeto de las organizaciones de la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos. La Sra. Lubaale recalcó a continuación la necesidad de institucionalizar los mecanismos de participación integrándolos en las estructuras de gobernanza existentes. Era necesario revisar y adaptar los marcos jurídico y político para crear un entorno propicio para los espacios participativos existentes, entre otras cosas mediante presupuestos y formación adecuados. El derecho a participar en la vida pública, especialmente en tiempos de crisis sanitaria, debía estar protegido de forma explícita en la legislación. Por último, la oradora hizo hincapié en el papel de la solidaridad internacional en la promoción de respuestas innovadoras aprendiendo de las experiencias de otros y en la función que desempeñaban las organizaciones multilaterales en la provisión de orientación, asistencia técnica y otras oportunidades de diálogo, así como en la supervisión de los esfuerzos de participación pública en todo el mundo.

31. El Presidente de AfroLeadership, Charlie Martial Ngounou, afirmó que el nivel de la participación pública en la toma de decisiones en el Camerún durante el periodo de la COVID-19 había sido bajo, según un estudio realizado por AfroLeadership. Las observaciones que habían realizado en diversos países mostraron que la participación pública se consideraba sobre todo responsabilidad de los ciudadanos y de las organizaciones de la sociedad civil, y que los gobiernos no comprendían bien su importancia. Era preciso institucionalizar la participación pública en los planos regional, nacional e internacional para aumentar la transparencia, la rendición de cuentas y la confianza. La financiación directa para iniciativas de la sociedad civil fomentaba la participación pública; confiar en el voluntariado y el activismo cívico no siempre generaba resultados óptimos, como quedó demostrado durante la pandemia de COVID-19. Era necesario cambiar la idea de que “el Gobierno sabe qué es lo mejor”, ampliamente aceptada en diversos países, mediante la elaboración de programas educativos nuevos que inculcaran en las sociedades la importancia de la participación pública. Por último, el Sr. Ngounou subrayó la importancia de utilizar las nuevas tecnologías para garantizar una participación pública efectiva, ya que ello contrarrestaba el argumento de que la participación pública era costosa y consumía mucho tiempo. La difusión de la tecnología móvil en todo el mundo ofrecía grandes posibilidades para mejorar el acceso de los ciudadanos a la información, la educación y la participación en la elaboración, aplicación y supervisión de las decisiones y las políticas.

32. En el debate que tuvo lugar a continuación los participantes destacaron el vínculo entre el derecho a la salud y otros derechos humanos, incluido el derecho a participar en la vida pública, y la importancia de crear lugares seguros para la participación equitativa e integradora de la sociedad civil y los agentes pertinentes en la toma de decisiones. Afirmaron que la pandemia de COVID-19 había puesto en entredicho el progreso basado en la ciencia y el sistema multilateral. Los participantes plantearon, entre otras cosas, la cuestión de las campañas de desinformación que tenían un impacto negativo en el derecho a la participación y subrayaron la importancia de elaborar estrategias para garantizar el acceso a información veraz a través de medios físicos o digitales. A este respecto, los participantes recalcaron la importancia del intercambio de información entre los Estados para contrarrestar eficazmente las campañas de desinformación impulsadas por diferentes intereses espurios. Indicaron que el respeto de los derechos humanos, la democracia y el estado de derecho debía seguir siendo un elemento prioritario en la respuesta a las crisis. Los participantes también subrayaron la importancia de los medios de comunicación y de los periodistas para evitar que se propagara el pánico y difundir información veraz durante las emergencias, respetando las normas éticas más estrictas del periodismo responsable, y de la cooperación entre múltiples partes interesadas para garantizar el flujo libre y oportuno de información objetiva.

33. En sus intervenciones finales, los panelistas recordaron la importancia de la confianza y señalaron que una comunicación eficaz, que incluyera decir al público la verdad sobre la falta de información, también contribuía a la instauración o la preservación de la confianza. Los participantes determinaron que el mundo académico era un elemento importante de la comunidad y podía desempeñar una función mayor para reducir las distancias entre las

instancias decisorias y la sociedad civil. El mundo académico podía proporcionar investigación científica, información con base empírica e informes basados en pruebas a los que se podría recurrir posteriormente para adoptar decisiones, por ejemplo en tiempos de crisis. Señalando la eficaz función que desempeñó en la respuesta al VIH, los panelistas sugirieron que el Consejo de Derechos Humanos, con su poder de convocatoria, podía ser un buen foro para determinar las mejores prácticas y los principios rectores, garantizando la participación de voces diversas. Las organizaciones multilaterales podían desempeñar una función importante en la creación de espacios de debate y colaboración entre múltiples partes interesadas para compartir experiencias. Era necesario reconsiderar el modo de gobernanza aplicado en tiempos de crisis de salud pública. Había que abandonar la práctica de limitados conocimientos científicos especializados y de gobernanza de la crisis a puerta cerrada que había excluido a otros sectores, incluidos los agentes de la sociedad civil, constatada durante la pandemia de COVID-19. La participación efectiva en tiempos de crisis solo podía lograrse si ya se practicaba en circunstancias normales a través de espacios participativos institucionalizados. Para garantizar una participación más efectiva y cambiar el modo de gobernanza a fin de lograr ese objetivo se requería una fuerte voluntad política. Se sugirió adoptar como buena práctica la creación de plataformas de verificación de datos apoyadas activamente por ciudadanos empoderados, especialmente jóvenes, que se utilizaban en algunos países, con miras a contrarrestar las campañas de desinformación en tiempos de crisis sanitaria.

VI. Observaciones finales

34. En sus observaciones finales, el Sr. Howland destacó los principales puntos que se habían tratado durante el taller y que podrían estimular la adopción de nuevas medidas. Comenzó expresando la esperanza de que, en el año en que se celebraba el 75° aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, se comprendiera mejor que los derechos humanos ofrecían barreras de seguridad útiles para la elaboración de políticas. Insistió en la necesidad de redoblar los esfuerzos para que todos los Estados Miembros reconocieran el valor de los derechos humanos en tiempos de crisis, lo que no siempre había sido el caso durante la pandemia. Como conclusión clave del taller, afirmó que “puede que la democracia tenga que adaptarse en tiempos de emergencias de salud pública u otras crisis mundiales, pero nunca debe debilitarse”, retomando las palabras de bienvenida de la Alta Comisionada Adjunta. El Sr. Howland subrayó que las medidas de emergencia debían ser necesarias, proporcionadas, de carácter temporal y no discriminatorias. El uso de confinamientos y otras medidas de emergencia, exacerbado por la ausencia de enfoques participativos inclusivos, había afectado de manera desproporcionada a los grupos marginados y vulnerables durante la pandemia de COVID-19.

35. El Sr. Howland señaló que la pandemia y las respuestas de emergencia habían repercutido negativamente en los derechos humanos de las mujeres y habían agravado las desigualdades de género, incluida la capacidad de las mujeres para participar en la vida pública. Había que dedicar esfuerzos especiales a los que se quedaban atrás, a fin de garantizar que se respetasen sus derechos, sobre todo en tiempos de crisis. La participación inclusiva, segura y significativa en la vida pública era fundamental para abordar muchos de los problemas estructurales que impedían el acceso inclusivo y equitativo a la salud y sus determinantes subyacentes. Para estar mejor preparados ante crisis futuras, era importante establecer una participación social institucionalizada, regular, sostenida y significativa, mejorar la recogida de datos y brindar formación a los funcionarios y empoderamiento a los ciudadanos en materia de participación antes de que se produjera una emergencia. Del mismo modo, la comunicación basada en pruebas y la creación y el uso de medios y formas de participación innovadores, así como interacciones más sostenidas entre los ciudadanos y los responsables de las políticas y un compromiso más estrecho con los agentes de la sociedad civil, en particular durante las emergencias, también eran factores clave para mejorar la preparación ante futuras crisis sanitarias o de otro tipo. Por último, el Sr. Howland hizo hincapié en la importancia capital de restablecer la confianza y crear espacios innovadores y un entorno propicio para mejorar las respuestas a futuras pandemias y de aplicar eficazmente el derecho a participar en la vida pública.

VII. Recomendaciones

36. Los Estados deberían reconocer que la participación inclusiva, significativa y segura de todas las personas y comunidades en la vida pública es crucial para promover una democracia eficaz y resiliente, el estado de derecho, la inclusión social, el crecimiento económico y el desarrollo sostenible, así como para hacer avanzar la igualdad de género.

37. Los Estados deberían asegurarse de que la participación pública sea un componente clave de las estrategias que se elaboren para garantizar la salud pública, en particular durante las crisis sanitarias, ya que empodera a las personas y a las comunidades para asumir la responsabilidad de su bienestar; permite determinar los riesgos y retos sanitarios; reduce las desigualdades en materia de salud; fomenta la confianza en las instituciones de salud pública; y refuerza la resiliencia y la rendición de cuentas de los sistemas sanitarios.

38. La confianza pública en las instituciones y las estructuras de gobernanza, tras su erosión en muchos países durante la pandemia de COVID-19 debido al uso indebido o desproporcionado de las medidas de emergencia y a la suspensión temporal indebida de los mecanismos de supervisión, debería restablecerse mediante el fomento de instituciones resilientes, la participación inclusiva, significativa y segura en la vida pública y un espacio cívico libre. Los Estados deberían velar por que la participación pública fuese el elemento central de la recuperación a largo plazo y la preparación para las crisis sanitarias u otras emergencias futuras.

39. En situaciones de crisis sanitaria u otras emergencias, se deberían adoptar medidas para garantizar que en los procesos de toma de decisiones se integren en todos los niveles las voces de los más afectados por la crisis y con menos representación en la vida pública, como las mujeres, los niños y los jóvenes, las personas con discapacidad, los Pueblos Indígenas, las personas afrodescendientes, las personas LGBTQI+, las minorías, los desplazados internos, los migrantes y las personas pertenecientes a otros grupos marginados.

40. Todas las medidas de emergencia introducidas por los Estados para proteger a la población deben ser estrictamente necesarias, proporcionadas, de carácter temporal, no discriminatorias y sujetas a revisión judicial, de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos. Aun cuando no se haya declarado el estado de emergencia, las medidas excepcionales adoptadas por los Estados para proteger la salud pública que puedan restringir determinados derechos humanos deberían cumplir los requisitos de legalidad, necesidad y proporcionalidad y no ser discriminatorias. Estas medidas no deberían utilizarse indebidamente para obstaculizar la labor de las organizaciones de la sociedad civil, los defensores de los derechos humanos y los periodistas y otros trabajadores de los medios de comunicación, y deberían ser sometidas a revisiones periódicas para confirmar su compatibilidad con el derecho internacional de los derechos humanos. Cuando las medidas ya no sean necesarias o proporcionadas a la situación, deberían ser anuladas.

41. Los Estados deberían aprovechar las lecciones aprendidas de la pandemia de COVID-19 para reforzar su infraestructura institucional y proteger las instituciones democráticas frente a crisis sanitarias inesperadas y generalizadas.

42. Los Estados deberían establecer marcos legislativos y procedimientos operativos adecuados que sean aplicables o adaptables a este tipo de crisis y que incluyan el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones para promover y fomentar la participación pública.

43. Se deberían llevar a cabo evaluaciones del impacto en los derechos humanos para garantizar que el diseño, el desarrollo y el funcionamiento de las nuevas tecnologías, incluida la inteligencia artificial, sean plenamente coherentes con las normas de derechos humanos, tanto en circunstancias normales como en tiempos de crisis.

44. Los procesos de toma de decisiones que afectan a la vida de las personas deberían regirse por el derecho internacional de los derechos humanos y garantizar la

transparencia, el acceso a la información y la participación en los planos local, nacional e internacional, entre otras cosas mediante espacios participativos formales, permanentes e institucionalizados.

45. Garantizar la participación efectiva en el contexto de la toma de decisiones durante las emergencias requiere una inversión importante y el compromiso de defender el estado de derecho y los derechos humanos, incluido el derecho a participar en la vida pública, en circunstancias normales. Por lo tanto, los Estados deberían promover la participación pública equitativa y significativa en tiempos ordinarios, por ejemplo mediante espacios participativos institucionalizados y multilaterales, que deberían estar preparados para ser utilizados en situaciones de crisis con las adaptaciones pertinentes.

46. Se debería dar prioridad a la participación social sistemática y significativa de las comunidades en el diseño y la aplicación de las políticas sanitarias mediante las reformas jurídicas necesarias, la inversión financiera estable y el fortalecimiento de la capacidad de los gobiernos para elaborar y aplicar mecanismos participativos. El empoderamiento de las personas y las comunidades mediante la participación resulta fundamental para construir una atención primaria de la salud centrada en las personas más sólida y resiliente, así como un futuro más sano, seguro y justo para todos.

47. Los Estados deberían recopilar datos desglosados y que tengan en cuenta las cuestiones de género, respaldar la recopilación de dichos datos por parte de las comunidades y garantizar su uso, incluido en tiempos de crisis, para ayudar a orientar las reformas de política y la elaboración de respuestas adecuadas a las crisis, entre otras cosas determinando las necesidades de las comunidades y los grupos vulnerables, y velar por la participación efectiva e inclusiva de la población en la toma de decisiones.

48. Los gobiernos, las organizaciones de medios de comunicación y los agentes de la sociedad civil deberían cooperar activamente, en particular durante las crisis, para contrarrestar la información errónea y la desinformación, tanto en línea como fuera de ella, y para garantizar el derecho de las personas a acceder a la información y asegurar que cuentan con la capacidad necesaria para tomar decisiones con conocimiento de causa, entre otras cosas promoviendo iniciativas de verificación de datos.

49. Se debería garantizar en todo momento la participación equitativa y significativa de las mujeres en los procesos de toma de decisiones, incluso en tiempos de crisis. No se trata solo de una obligación jurídica para asegurar el pleno disfrute de los derechos humanos por parte de las mujeres, sino también de un factor crítico para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, un crecimiento equitativo y sostenible y una gobernanza moderna y transparente.

50. Los Estados deberían garantizar la participación igualitaria y significativa de los jóvenes y otros grupos tradicionalmente marginados o excluidos en los procesos de toma de decisiones, entre otras cosas en el diseño y la aplicación de medidas de prevención y respuesta.

51. Los Estados deberían garantizar la participación del personal de la salud en los procesos de toma de decisiones, recurriendo a su asesoramiento técnico y a sus aportaciones para elaborar respuestas sanitarias a las crisis que sean integrales y coordinadas.

52. Los Estados deberían reconocer a los agentes de la sociedad civil y a las instituciones nacionales de derechos humanos como asociados clave en materia de protección de los derechos humanos, especialmente en tiempos de crisis.

53. Se debería proteger el carácter apolítico e independiente de las instituciones nacionales de derechos humanos durante el desempeño de sus actividades de protección y promoción de los derechos humanos, incluido en tiempos de crisis. Se les debería proporcionar un marco jurídico e institucional sólido y recursos suficientes.

54. Los Estados deberían cooperar de buena fe con los agentes de la sociedad civil, incluidos el mundo académico y los defensores de los derechos humanos, en la respuesta a las crisis sanitarias, garantizando su participación en la formulación y ejecución de

estrategias sanitarias eficaces, ya que la sociedad civil es una parte esencial del tejido social y una fuente de resiliencia en tiempos de crisis.

55. Los Estados deberían valorar la posibilidad de elaborar métodos adecuados para mejorar la capacidad de la sociedad civil para participar en la preparación y respuesta ante una pandemia, brindándole ayuda para reducir sus gastos de funcionamiento.

56. Los Estados deberían adoptar medidas más enérgicas para proteger eficazmente a los agentes de la sociedad civil y a los defensores de los derechos humanos mediante la prevención, la disuasión y la investigación de las amenazas en línea y fuera de línea, así como crear conciencia para contrarrestar los estereotipos negativos y promover la comprensión y una cultura de respeto de las organizaciones de la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos.

57. La sociedad civil y las instituciones nacionales de derechos humanos deberían proseguir con su importante labor de promoción y protección de los derechos humanos, especialmente en tiempos de crisis.

58. Las Naciones Unidas deberían seguir fomentando los debates entre múltiples partes interesadas con vistas a compartir experiencias y determinar las mejores prácticas en relación con los espacios participativos creativos e innovadores y los medios para garantizar la participación de voces diversas.
